

rechos que pagaron al Estado seiscientos diez tercios azucar que introdujo á esta ciudad.»

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia, de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Simón Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.*

Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera intervino en la votacion de este amparo y que por haber fallecido antes de firmarse la sentencia anterior, no aparece en ella su firma.

México, Febrero 8 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 9 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca de Juárez, por José de la Paz y otros, contra los procedimientos del C. Gregorio Calvo, comandante militar de guardia nacional del pueblo de Jamiltepec, que los juzgó y sentenció á la pena capital, considerándolos como ladrones y plagiarios de las principales autoridades de dicho pueblo.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: Que José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolo-

nio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, solicitan amparo de la justicia federal contra el acto en virtud del cual trata de quitárseles la vida por haber sido condenados á ello por el C. comandante de guardia nacional, Gregorio Calvo, en sentencia pronunciada en Jamiltepec el día 25 de Diciembre del año próximo pasado. Dicha sentencia fué pronunciada en juicio que se siguió contra los promoventes con arreglo á la ley de salteadores y plagiarios, de 3 de Mayo del mismo año; y por el C. comandante Calvo, nombrado *ad hoc* por el gobierno del Estado.

Los hechos que dieron motivo á la acusacion de los referidos Paz y socios, y por los cuales se les juzgó en los términos dichos, son los siguientes:

Primero: Haber acompañado á los cabecillas Guillermo Tello, José Márrequin y Tomás Reyna, á la asonada ó rebelion que estos promovieron en Jamiltepec, en la madrugada del día 24 de Noviembre del año próximo pasado.

Segundo: Haber reducido á prision durante ocho horas, á las primeras autoridades del Distrito y al presidente municipal y alcalde primero de su cabecera.

Tercero: Haber exigido al C. jefe político José Juan Canseco, que entregase de los fondos públicos una cantidad determinada de dinero, y al C. Lic. Tereso Rodríguez juez del mismo lugar, que diese por concluidas las causas criminales que se les seguían y por las que estaban presos; y que decretase en ellas un auto de soltura.

Cuarto: Haber amenazado á las mismas autoridades con llevárselas de la poblacion, pero sin amagallas de muerte ni pretender ninguna cosa de ellas, de cuyo proyecto, si era cierto, desistieron voluntariamente desapareciendo de Jamiltepec y dejando en paz á las mismas autoridades.

Estos fueron los delitos cometidos por los peticionarios y por los cuales se les juzgó y sentenció aplicándoseles la ley de 3 de Mayo de 1873, expedida para juzgar á los sal-

teadores y plagiarios, y siendo el juez en el caso, un comandante militar nombrado especialmente por el gobierno, sin que hubiera sido jefe de la fuerza aprehensora, ni autoridad política.

Este ministerio, prescindiendo de la cuestión de si resultaron ó no justificados los hechos imputados á los solicitantes por no creer del caso entrar en ella, se limita á llamar la atención del juzgado sobre dos hechos, cuya existencia por sí sola basta para conceder el amparo que se promueve.

Ninguno de los delitos imputados á los peticionarios puede constituir el de asalto ó plagio, supuesto que el de asalto lo cometen quienes "en los caminos ó en lugares despoblados asaltan á los individuos con violencia, llevando el objeto de robarlos, herirlos ó matarlos, y los que en gavilla atacaren en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes." Ley de 3 de Mayo citada, art. 89. Por plagio se entiende la reducción de prision ó á cautividad de una ó muchas personas exigiéndoselos para restituirles su libertad, dinero ó servicios personales ó el canje de alguna ó algunas personas presas por autoridad legítima.

Los individuos de que se trata, no tuvieron el objeto de robar, herir ó matar á los habitantes de Jamiltepec. No de robar, porque nada pretendieron quitarles de sus propiedades, y la exigencia al jefe político para que les entregase la capitación, verificada por parte de los cabecillas mencionados, y no por los promoventes de este juicio, no puede estimarse como un robo á habitante alguno, porque no son de propiedad particular los fondos de capitación. No de herir ni de matar, porque aunque hayan vociferado amenazas en este sentido como sucede en todos los motines, revelaron que no se propusieron herir y matar, toda la vez que no hicieron ni una ni otra cosa pudiendo haberlo hecho, por tener dominadas á las autoridades y no oponerse nadie á sus desórdenes. Así, pues, no hubo asalto.

Plagio tampoco se cometió, porque no sujetaron los amotinados á prision ó cautividad á ninguno, exigiéndoles dinero, servicios personales, ni canje de presos. No puede ponerse en duda que no se exigieran servicios ni canje. Dinero tampoco se exigió, pues como ya se ha dicho, los fondos de capitación no pueden ser propiedad particular, ni se exigieron como condición para restituir su libertad á las autoridades, como lo prueba el hecho de que se les dejó con ellos, no obstante que el jefe político no entregó todo lo que se le pidió de los fondos.

Con lo expuesto queda demostrado, que los peticionarios fueron juzgados por los delitos que no cometieron, y por lo tanto, por tribunal especial que tal es de los saltadores y plagiarios, y aplicándoles una ley que no pudo serles exactamente aplicable, por cuya razón se vulneran en sus personas las garantías que otorgan los arts. 13 y 14 de la Constitución federal; se vulnera en los quejosos también la garantía del último artículo citado, porque el C. comandante Calvo, fué nombrado especialmente para el caso, pues no fué el jefe de la fuerza aprehensora, ni la autoridad política que debió juzgar á los acusados, caso de haber sido saltadores ó plagiarios.

Siendo, por tanto, evidente la violación de las garantías citadas, en las personas quejosas, y fundándose este ministerio en los arts. 101 y 102 de la Constitución federal y art. 19 fracc. 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo á ese juzgado declare: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á los peticionarios, contra el acto que reclaman, consignándolos á la justicia ordinaria para lo que haya lugar por la acusación que pesa sobre ellos.

Oaxaca de Juárez, Noviembre 26 de 1874.  
—José M. Ballesteros.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Oaxaca de Juárez, Diciembre 4 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido ante este juzgado el 30 de Marzo del corriente año, por José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolonio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, contra el fallo que pronunció el comandante militar de Jamiltepec, condenándolos a la pena capital por los delitos de asalto y plagio, por creer violadas en sus personas las garantías que otorgan los arts. 13, 14 y 21 de la Constitución general de la República.

Visto así mismo el informe de la autoridad ejecutora, manifestando que la causa que se formó a los quejosos, se encuentra en el Congreso del Estado por haber solicitado la gracia de indulto.

Vistas igualmente las pruebas rendidas por los que representan, acompañando testimonio de dicha causa; lo pedido por el ministerio fiscal, lo alegado por el abogado defensor y cuanto mas ver convino:

Considerando: que para que legalmente pueda calificarse el delito de asalto, es necesario que concurren las circunstancias de que los delincuentes ejerzan violencia en los individuos, ya sea para robar, herir ó matar (art. 8º de la ley de 3 de Mayo de 1873,) vigente por la de 10 de Abril del presente año.

Considerando: que de las constancias que arroja la causa que se instruyó a los quejosos, no se infiere que al reducir a prision a las autoridades, hayan tenido los delincuentes el ánimo de robarlos, pues claramente se vé de lo actuado, que José de la Paz y socios exijieron al jefe político los fondos públicos para la manutencion de la fuerza que se había levantado, y no del peculio propio de dichas autoridades para aprovecharse de él.

Considerando: que ni en el acto de la aprehension, ni aun en el arresto de las mismas autoridades, hay constancia de que los

acusados de asalto, hayan herido ó privado de la vida a alguna de ellas, y que si bien es cierto que de algunas declaraciones de los cómplices, aparece que José de la Paz pretendió hacer fuego con el fusil sobre el jefe político, este conato no fué frustrado por hecho extraño, sino que él mismo, antes *arrepintiéndose*, desistió de su proyecto, de lo que se infiere que solo hubo intención de cometer un delito, lo cual no es punible segun la ley 2 tit. 31 part. 7ª

Considerando: que el delito de plagio, lo constituye la circunstancia de que reducidos a prision ó cautividad, uno ó muchos individuos, se exija por su rescate dinero, servicios personales ó canje de alguna ó algunas personas, cuyas circunstancias no concurrieron en el hecho de que fueron acusados los que representan, supuesto que de lo actuado en la causa, aparece que despues del grito de alarma, fueron reducidos a prision el jefe político, alcalde, juez del partido y presidente municipal, a quienes no se exigió por su rescate cosa alguna, pues la libertad la recobraron en virtud de las súplicas de los vecinos de la población.

Considerando: que la aplicacion de la ley de 3 de Mayo citada, para castigar el hecho criminoso de que se ha hecho mérito, es una violacion contra la garantía otorgada por el art. 14 de la Constitución general de la República, supuesto que del análisis anterior lógicamente se deduce, que el delito cometido por José de la Paz y socios, no es el de asalto y plagio.

Considerando: que respecto del tribunal que juzgó y sentenció el expresado delito, hay que notar que fué establecido especialmente *ad hoc*, para conocer de él segun se ve del acto ó orden de proceso (fs. 1ª de la causa.)

Considerando: que si bien es cierto que el jefe político José Juan Canseco, como persona ofendida, era incompetente para conocer del delito cometido en su persona, tambien lo es que la ley de 16 de Noviembre de 1857 vigente en el Estado, determi-

na el modo de reemplazar en sus impedimentos, á los funcionarios del orden administrativo.

Considerando: que según los datos que ministra la causa, el delito cometido por José de la Paz y socios, es el de asonada ó sedición, según se vé de los arts. 7º y 25 de la ley de 5 de Febrero de 1828, es incontrovertible que su conocimiento y punición es de la jurisdicción ordinaria.

Considerando: que con el hecho de haber juzgado el delito de que se trata, por un tribunal especial, y aplicando malamente una ley que castiga otros delitos, se ha cometido un atentado violando las garantías que otorga la Constitución de la República en sus arts. 13 y 14.

Considerando: que la pena capital á que fueron sentenciados los quejosos por el delito cometido, está abolida por el art. 23 de la misma Constitución general, y vigente solo para los saltadores de camino, incendiarios, parricidas, etc., y

Considerando por último: que los quejosos están penados respectivamente de varios delitos, por lo que se hallaban presos la noche del suceso de que se ha hecho mérito, según consta de su misma confesión y de la declaración del jefe político. La Justicia federal con fundamento de lo expuesto, de los arts. 13, 14, 21, 101 y 102 de la Constitución general de la República y frac. 1º del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, declara:

Primero: Que es de ampararse y se ampara y protege á los quejosos José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolonio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, contra el fallo pronunciado por el comandante militar de Jamiltepec, en la causa que se les instruyó por asalto y plagio.

Segundo: Manda sean consignados los quejosos á la autoridad correspondiente para los efectos á que haya lugar. Hágase saber y remítase este juicio en revisión á la Suprema Corte de Justicia, sacándose copias

de este fallo para su publicación en los periódicos *Diario Oficial y Semanario Judicial de la Federación*. El ciudadano juez tercer suplente de Distrito, en ejercicio, así lo decretó y firmó. Doy fe.—*F. Pérez*.—*Manuel Galindo*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero 7 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Oaxaca de Juárez, por José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolonio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, contra los procedimientos del C. Gregorio Calvo, comandante militar de guardia nacional del pueblo de Jamiltepec, que los juzgó y sentenció á la pena capital, considerándolos como ladrones y plagiarios de las principales autoridades de dicho pueblo de Jamiltepec. Visto lo pedido por el ciudadano promotor fiscal: lo alegado y probado por el abogado defensor de los quejosos: el testimonio de las diligencias que practicó dicho comandante militar de Jamiltepec: la sentencia de muerte que éste pronunció contra los acusados, y la que dictó el juez de Distrito en este recurso, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino:

Considerando primero: Que de las actuaciones que practicó el C. Gregorio Calvo comandante militar de guardia nacional de Jamiltepec, aparece: que el gobierno del Estado de Oaxaca lo comisionó para que ejerciese las funciones de jefe político, á la vez que de comandante militar, para que juzgara con arreglo á la ley general de 3 de Mayo de 1873 á los acusados, con cuya providencia es evidente que se violaron en las personas de estos, las garantías que otorgan los arts. 13, 14 y 21 de la Constitución federal.

Considerando Segundo: que en la 1ª parte del art. 13, expresamente se manda que

"nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales;" en la 2ª parte del 14 que "nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley," y en la 1ª parte del 21 que, "la aplicacion de las penas *propriadamente tales*, es exclusiva de la autoridad judicial."

Tercero: Que en el presente caso, real y positivamente no hubo el delito de asalto ni de plagio, sino solo el de sedicion ó asonada, cuyos delitos están sujetos á la legislacion comun; y por consiguiente sometidos sus autores á las autoridades judiciales ordinarias. Por estas consideraciones se decreta: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia que pronunció el Juez de Distrito de Oaxaca, con fecha 4 de Diciembre último, en la que declaró:

"Primero: Que es de ampararse y se ampara y protege á los quejosos José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolinio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, contra el fallo pronunciado por el comandante militar de Jamiltepec, en la causa que se les instruyó por asalto y plagio; y

Segundo: Manda sean consignados los quejosos á la autoridad correspondiente para los efectos á que haya lugar."

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 22 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Promovido ante el C. Juez 1º suplente de Distrito de Chiapas, por el C. Manuel Sanchez, en representacion de Dª Prisciliana Figueroa, contra la sentencia del C. Juez propietario de este Juzgado, que declaró baldíos y denunciabiles unos terrenos situados en la cabidad de los de Amatepec y Jimones, que dicha señora juzga como de su propiedad.*

### REQUERIMIENTO FISCAL.

Ciudadano Juez primero suplente de Distrito.

El promotor fiscal en el juicio de amparo promovido por el C. Manuel M. Sanchez, apoderado de Doña Prisciliana Figueroa, contra la sentencia que el C. Juez propietario de Distrito del Estado pronunció con fecha 29 de Abril último; su estado supuesto que es el de alegar de buena prueba, dice: que en su concepto y por lo que dan de sí los autos, no procede el amparo de que se trata, según las razones que brevemente pasa á manifestar.

Durante el término probatorio, el apoderado de la Señora Figueroa rindió por toda prueba las que ya se habían considerado en el juicio de oposicion que sustentó contra el C. Manuel Esponda y Farrera, y en el que fué vencida sin que hubiese aparecido la única que pudiera haber dado visos de legalidad á su pretension de amparo, que es la exhibicion del título original del terreno cuestionado, que á su juicio para en poder de los Señores Esponda, y la que ni en éste ni en el expresado juicio de oposicion, procuró inquirir, contentándose con